

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Coquimbo
CAUSA ROL : C-835-2021
CARATULADO : VEAS/TRINCADO

Coquimbo, treinta y uno de Mayo de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 22 de julio de 2021, comparece don Marcelo Andrés Peñailillo Henríquez, abogado, C.I. N° 18.762.815-6, domiciliado en calle Cristóbal Colón N° 352, oficina 416, La Serena, en representación de don Manuel Antonio Veas Tapia, operario, chileno, viudo, C.I. N° 8.242.182-3 domiciliado en calle Río Lauca N° 3.147, comuna y ciudad de Coquimbo, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario en contra de en contra de don Eduardo Lenin Trincado Iglesias, C.I. N° 12.943.056-7, ingeniero civil industrial, chileno, soltero, domiciliado en calle María Angélica N° 99 departamento 271, sector La Herradura, Coquimbo, fundada en que por sentencia de fecha 10 de abril del año 2021, en causa RIT 77-2020, RUC 1800854672-6, dictada por el Tribunal Oral en lo penal de La Serena, don Eduardo Lenin Trincado Iglesias, ya individualizado, fue condenado como autor de un delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal, cometido en la persona de don Manuel Antonio Veas Tapia, hechos ocurridos el día 31 de agosto de 2018, en Coquimbo, a la pena de un año de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas del juicio. Hace presente que dicha sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, según da cuenta certificado de ejecutoria de fecha 08 de junio del año 2021. Indica que, según consta de los autos penales el día 31 de agosto de 2018, alrededor de las 12:30 horas, en la vía pública en calle Lauca frente al N° 3147, Coquimbo, el demandado y condenado don Eduardo Lenin Trincado Iglesias, agredió a la víctima don Manuel Antonio Veas Tapia, abalanzándose sobre él para luego propinarle un golpe de puño en el rostro, ocasionándole una probable fractura impactada de lámina papirácea derecha con desviación del tabique nasal, lesiones de carácter graves, que presentaron un tiempo de sanación e incapacidad entre 30 a 35 días, según Informe de Lesiones del Servicio Médico Legal de La Serena. Afirma que luego de ocurrido estos hechos, y en sede penal, se instó al demandado en reiteradas oportunidades a hacer frente a los gastos ocasionados por su actuar doloso, esto, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio, al cual el demandado no accedió. Sostiene que a consecuencia de los hechos relatados y que constituyeron el referido delito y la condena penal del actual demandado, el demandante debió incurrir en múltiples gastos, tales como: gastos médicos y exámenes, además de medicación y remedios propios para el tratamiento del intenso dolor físico, a lo que debe agregar la carga emocional que conllevó el delito en cuestión y que le ha significado la sustanciación del proceso,



no sólo en lo referido a los dolores físicos, sino que también las múltiples molestias constantes e incomodidades, que incluso a la fecha se siguen manifestando en el demandante, lo que ha generado un daño psicológico, que debe ser reparado por el demandado y que se constituye en el daño moral. Expone que, habiéndose probado en sede penal la existencia y efectividad de los hechos denunciados, es decir, el delito mismo, más la responsabilidad del demandado por su participación en ellos, cabe a su parte accionar civilmente para perseguir la responsabilidad extracontractual del condenado y hoy demandado, don Eduardo Lenin Trincado Iglesias, cuando este se ha negado a resarcir los perjuicios originados del delito por el cometido. En cuanto a los daños, manifiesta que enfrentó una disminución patrimonial importante, al incurrir en gastos económicos, tratamiento médico, medicación, radiografías, lo que se valora a lo menos en la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos). En cuanto al lucro cesante, señala que estuvo sin poder trabajar por más de 40 días, lo que equivale \$2.000.000 (dos millones de pesos). Respecto del daño moral, indica que el demandado Eduardo Lenin Trincado Iglesias, con ocasión del acto ilícito por el que fue condenado, ha ocasionado múltiples daños con ocasión de las lesiones que este causó en la persona del demandante, lo que se explica atendiendo al tiempo transcurrido en que ocurrieron los hechos, y en la fecha que este fue condenado, más de dos años de tramitación, lo cual ha devenido en una terrible situación psicológica en su representado, con una inestabilidad emocional y un constante temor a miedos propios por la experiencia vivida. Por lo anteriormente descrito, avalúa prudencialmente el daño moral sufrido a consecuencia del acto ilícito perpetrado por el demandado, en la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos). En virtud de lo expuesto, previas citas legales, solicita definitiva que se acoja la demanda de indemnización de perjuicios, condenando al demandado a pagar por concepto de año emergente, la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos), por lucro cesante, la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos) y por daño moral, la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos), lo que da un total de \$14.000.000 (catorce millones de pesos), o lo que el Tribunal estime en Derecho, más reajustes, intereses y costas,

Con fecha 14 de septiembre de 2021 se notificó al demandado por cédula.

Con fecha 28 de septiembre de 2021 tuvo lugar la audiencia de estilo. La parte demandante ratificó la demanda íntegramente, solicitando que sea acogida, con expresa condenación en costas. En la misma audiencia, mediante minuta escrita, la parte demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, fundada en que los hechos señalados en el libelo del actor no son efectivos, afirmando que la causa penal se originó por un abuso irracional del demandante. Indica que el actor construyó una obra medianera, sin autorización de su representado, por lo cual, y ante la imposibilidad de conversar con él, sin riesgo para su integridad, se presentó una denuncia ante la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo, la que decreto la demolición de la construcción irregular, hecho que desató la ira del actor, amenazando constantemente a su representado y su familia como sostiene se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente. Señala que en ese orden de



ideas y mientras un cliente de la cónyuge de su representado estaciono mal su vehículo, ocupando parte de la salida de vehículos del actor, desató su furia y fue directamente a agredir a su representado quien en ese momento llevaba un pastelón de pasto sintético al vehículo del cliente de su señora, agregando que la diferencia física en cuanto a embargadora es notaria, pues su representado pesa 68 kilos y mide 1,68 metros y el actor pesa más de 100 kilos. Detalla que en ese momento el actor se abalanzó sobre el demandado de autos, golpeándolo en el pecho, y en la caída su representado le dio una cachetada en el costado izquierdo casi el cuello, siendo estos hechos los que actor denunció y que generaron la causa penal, adicionando que jamás presentó querella, ni licencias médica, ni gastos médicos, no presentando ninguna prueba, añadiendo que pidió las costas del juicio y el tribunal rechazó la solicitud por no ser querellante. Manifiesta que el fallo en que se fundamenta la demanda se produjo por una mala defensa, que primero no pidió recalificación del delito, ya que nunca fueron lesiones graves, según el parte de carabineros que da cuenta de lesiones leves, y lo único que condenó a su parte fue su declaración, en la que señaló que repelió el ataque con una cachetada. Aclara que es evidente que una cachetada en defensa propia no puede causar los perjuicios demandados, ya que, la desproporción física entre ambos hace imposible que le haya causado una fractura en el otro costado del rostro donde no fue cacheteado, y que el demandante jamás presento licencia médica o incapacidad laboral, adicionando que los hechos ocurrieron hace tres años y durante todo este tiempo su representado se ha visto acosado y amenazado, debiendo abandonar su hogar por su seguridad y la de su familia, causando graves perjuicios económicos y emocionales. En virtud de los hechos expuestos, solicita el rechazo de la demanda de autos, con costas.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

Con fecha 21 de octubre de 2021 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes con fecha 05 de noviembre de 2021.

Con fecha 01 de diciembre de 2021 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DOCUMENTAL:

PRIMERO: Que en escrito de fecha 16 de diciembre de 2021, la parte demandante ha objetado los documentos exhibidos en audiencia de percepción documental de fecha 14 de diciembre de 2021 por la demandada, consistente en dos videos, objetando su idoneidad, alegando que no son documentos electrónicos, ni medios de pruebas lícitos para ser incorporado por dicha vía, su falta de autenticidad, fundado en que se desconoce su origen, el día y hora en que fue registrado, y la persona que lo realizó, su falta de integridad, argumentando que se ha presentado solo una fracción de ellos, señalando que el vídeo ha sido adulterado, mutilado y su falta de contexto, e imposibilidad de identificar a persona



fehacientemente y que con ello se tenga por acreditada su identidad, además de la imposibilidad de concluir los hechos relatados por la contraria.

SEGUNDO: Que, evacuando el traslado conferido, la parte demandada solicita el rechazo de la objeción, fundado en que la oportunidad procesal para realizarla correspondía en la audiencia de percepción documental, encontrándose en consecuencia precluida la oportunidad de objetar los documentos. En subsidio, responde sobre la idoneidad, que los documentos son por definición documentos electrónicos, toda vez que, como es de público y notorio conocimiento, no se puede reproducir un video en formato PDF, que es el soporte admitido por la Oficina Judicial Virtual, menos aún, materialmente en papel. Lo que permite concluir que, la única vía idónea para acompañar legalmente en juicio dichos documentos electrónicos, es por la vía del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la ilicitud que alega la contraria, señala que ambos videos fueron filmados en la vía pública, no siendo la filmación vulneratoria de ningún derecho, cualquiera sea la naturaleza. Sobre la autenticidad, indica que lo visto en ambos videos, no son sino los hechos relatados por la contraria en la demanda de autos, así como en la sentencia condenatoria en sede penal. Agrega que la oportunidad para aclarar todas las interrogantes sobre quienes protagonizan el video, correspondía a la audiencia de percepción documental, guardando silencio la contraria al respecto. Sobre la integridad, alega que los videos acompañados son íntegros, no siendo cortados ni mutilados, en caso contrario deberá probarse por quien alega esta falta de integridad. Sobre su falta de contexto, hace mención a lo ya expresado respecto a la autenticidad, agregando que queda de manifiesto en audiencia de percepción documental, que “la persona vestida de café, es el demandante de autos” y “la persona detrás del rollo de pasto sintético es el demandado” no realizándose objeción alguna al respecto en ese estadio procesal. Además, solicita se tenga presente que, en un video grabado en ese contexto, como es de público conocimiento, no es de esperar que cada persona acredite su identidad con la cédula respectiva.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la objeción, esta se rechazará, toda vez que la ley regula expresamente la materia en los incisos finales del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, señalando que para los efectos del artículo 346 N° 3 de dicho cuerpo legal, se entenderá que los documentos han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción y solo en caso que los documentos electrónicos puedan ser directamente percibidos en la carpeta, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria al momento de notificarse la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente, de manera que el término legal para impugnar el documento comenzó a correr el día 14 de diciembre del año 2021 y no se circunscribió a la audiencia de percepción documental como lo pretende la demandada.

CUARTO: Que pronunciándose derechamente sobre el fondo de la objeción deducida, se procederá al rechazo de la misma, toda vez que en la especie se ha



acompañado una videograbación que responde al concepto amplio de documento electrónico que recoge el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, y cuyas causales de impugnación deben fundamentarse en la falta de autenticidad o de integridad, y en la especie, el articulista solo se ha remitido a señalar que se desconoce su origen, el día y hora en que fue registrado y la persona que lo realizó, alegaciones que no dan cuenta del hecho de haberse producido una adulteración en el mismo y en cuanto a la alegación de falta de integridad, tampoco la demandante ha señalado cual sería la real extensión del video y qué partes fueron omitidas, de manera que dicha alegación, unida a la de “falta de contexto”, en cuanto apuntan a evidenciar la reducida duración del video en relación a la extensión del desarrollo de los hechos, y la imposibilidad de identificar a alguna persona en forma fehaciente en el mismo, se refieren más al valor probatorio del documento, que a su forma.

EN CUANTO AL FONDO

QUINTO: Que la responsabilidad perseguida por el actor en su demanda, es de naturaleza extracontractual la que supone la existencia de los siguientes elementos: a) la existencia de un hecho, b) Que el hecho ocurra con dolo o culpa, c) la existencia de un daño, y, d) la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Así resulta del régimen legal a que está sujeto este tipo de responsabilidad civil en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

SEXTO: Que a fin de acreditar sus pretensiones, la parte demandante rindió la siguiente prueba documental: **1)** Sentencia definitiva de fecha 10 de abril de 2021 en causa RIT 77-2020, RUC 1800854672-6 del Tribunal Oral en lo penal de La Serena; **2)** Certificado de ejecutoria de fecha 08 de junio de 2021, de la sentencia dictada en autos RIT 77-2020, RUC 1800854672-6 del Tribunal Oral en lo penal de La Serena; **3)** Evaluación Psicológica de demandante, don Manuel Antonio Veas Tapia, suscrito por la profesional psicóloga Constanza Segovia Ibarra, de fecha 16 de julio del año 2021; **4)** Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes de fecha 21 de julio del año 2021 del vehículo Station Wagon, Marca Mahindra modelo XUV500 FULL 2.2 color blanco satín, número de motor HWD4C12770, año 2013, P.P.U. FWCZ.50-7, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile; **5)** Copia de título de dominio vigente registrado a fojas 1.416 N° 776, del Registro de Propiedad correspondiente al año 2.012, ubicado en calle Alberto Holmgren Andersson N° 385, que corresponde al Sitio N° 7 de la Manzana G, del “Loteo Punta Mira Norte, Primera Etapa”, Sector Sauce de Miramar, comuna de Coquimbo; de propiedad de don EDUARDO LENIN TRINCADO IGLESIAS y doña CLARA AURORA IGLESIAS AZOLA, del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo; **6)** Copia de Informe del Servicio Médico Legal N° 393-18, en causa en proceso penal bajo el RUC: 1.800854672-6, RIT: 2993-2019 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RIT: 77-2020 Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, de fecha 16 de diciembre del año 2018, evacuado por la profesional Yasmín Constanza Ríos Bedoya; **7)** Receta médica, Dr. Roger Bitrán Parada, para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 15 de marzo del año



2019; 8) Bono de atención, código N° 65756210, exámenes, para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 24 de julio del año 2019. (\$57.735); 9) Bono de atención ambulatoria N° 39658044, radiografía de cavidades perinasales para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 27 de noviembre de 2018 (\$685); 10) Solicitud de exámenes, radiografía para el paciente Manuel Veas Tapia, Dr. Marko Domic Veneros; 11) Estado de cuenta, de fecha 24 de julio del 2019, detalle para el paciente Manuel Veas Tapia, en la suma de (\$57.735); 12) Estado de cuenta, de fecha 27 de noviembre de 2018, detalle para el paciente Manuel Veas Tapia, Clínica Antofagasta. (\$22.824); 13) Detalle de cuenta Urgencia N° 24184, 31 de agosto del año 2018, para el paciente Manuel Veas Tapia, Clínica Red Salud. (\$50.619); 14) Resultados de Radiografía de Malar W-O, Dr. Eduardo Villanueva Médico Radiólogo, en el paciente Manuel Veas Tapia.

SEPTIMO: Que adicionalmente, la parte demandante rindió la prueba testimonial de fecha 25 de noviembre de 2021, consistente en las declaraciones de doña Constanza Andrea Segovia Ibarra y de don Manuel Antonio Villanueva Cole, la primera de los cuales, en relación a la efectividad de haberse producido con fecha 31 de agosto de 2018, una agresión por parte del demandado al demandante, manifestó que es efectivo, indicando que es psicóloga, que realizó una evaluación psicológica a don Manuel Veas Tapia, por lo cual, tuvo acceso a los antecedentes que tenían que ver con la causa penal, y que al dar lectura a esos antecedentes, aparece que don Manuel fue víctima de lesiones graves, por parte del demandado. Preguntada sobre la existencia y magnitud del menoscabo moral o de la aflicción sufrida por el actor a consecuencia del hecho señalado, declaró que como ha señalado, le realizó una evaluación psicológica a don Manuel Veas, realizando también una valorización forense con la literatura especializada, específicamente don Enrique Echeburra, quien estudió las consecuencias psico-emocionales de las personas que han sido víctimas de delitos, y según los hallazgos encontrados en la evaluación que realizó, manifiesta que don Manuel presenta alteraciones en diversas esferas de su vida, como lo son la esfera personal, la laboral, y la interpersonal, dando cuenta todo ello de que presenta una lesión psíquica que es símil del daño emocional o también llamado daño moral, que en psicología se llama daño emocional o psicológico, indicando que lo sabe por la evaluación y entrevista psicológica realizada. Repreguntada para que diga a que hecho específicamente atribuye el daño, informa que al hecho de que fue víctima de lesiones. Repreguntada sobre si el documento acompañado en la demanda como “Informe Psicológico”, y que se le exhibe en el acto, fue realizado por la testigo, señala que si, realizó el informe y la firma es suya. Contrainterrogada para indicar si sabe si el demandante tuvo incapacidad laboral, señaló que si, en el momento de realizada la evaluación existían dificultades en el área laboral.

Don Manuel Antonio Villanueva Cole declaró no recordar exactamente la fecha o el día de los hechos que motivan la presente causa, pero si el año, que fue en el 2018, indicando que el demandante le contó que fue agredido por el demandado, porque le obstaculizaban la salida del vehículo de la casa. Indica que el



demandante le dijo esto, porque él le preguntó por qué tenía un hematoma en la cara, en el pómulo izquierdo, respondiendo que había sido agredido por el señor Trincado, con un golpe en la cara. Contrainterrogado, señaló no saber de quién era el vehículo que obstaculizaba la salida del señor Veas. Preguntado sobre la existencia y magnitud del menoscabo moral o de la aflicción sufrida por el actor a consecuencia del hecho señalado, manifestó que cuando conversaba con el demandado, él le comentaba que a consecuencia de esto, le había traído muchos problemas, andaba preocupado, desmoralizado, por las consecuencias del incidente. Repreguntado para que diga si sabe si el demandante fue asistido por un psicólogo producto de los hechos, indicó que le parece que sí, porque, como dijo anteriormente, él se sentía mal por lo que había pasado. █

OCTAVO: Que la parte demandada solicitó oficios a Codelco, División Radomiro Tomic, domiciliado en Avenida Central Sur N° 1990, Villa Ayquina, Calama, cuyo informe fue evacuado con fecha 17 de noviembre de 2021, indicando que el demandante Manuel Antonio Veas Tapia, cédula de identidad N° 8.242.182-3 no hizo uso de licencia médica en el mes de septiembre de 2018, adjuntando captura de pantalla con ausencias referida a dicho mes y la correspondiente liquidación de sueldo; y a Previred, cuya respuesta a oficio obra en autos con fecha 26 de noviembre de 2021, comunicando que no se registran licencias médicas de don Manuel Veas Tapia en el periodo consultado, adjuntando informe de pago de cotizaciones previsionales del demandado del periodo requerido, y agregando que pueden existir pagos previsionales efectuados en favor del trabajador, realizados a través de pagos directos en las respectivas Instituciones o por intermedio de otras entidades que otorgan servicios de recaudación de cotizaciones previsionales.

NOVENO: Asimismo, la demandada rindió prueba testimonial de fecha 23 de noviembre de 2021, consistente en las declaraciones de don Roberto Andrés Meriño Torrejón y doña Patricia Makarena Garay Zamora. El primero de ellos indicó que no hubo una agresión del demandado al demandante, sino que, como él presenció los hechos, fue del demandante al demandado, manifestando que concurrieron, con su cónyuge Patricia Garay y su hijo Adriano Meriño, en auto a la casa del demandado a buscar un rollo de pasto sintético, estacionando en la mitad entre la casa de Trincado y Veas, y que, una vez que salieron de la casa con el rollo, Veas comenzó a reclamar para sacar el auto, propinando insultos. Señala que le solicitó al señor Trincado que le sostuviera el rollo de pasto sintético, para mover el auto y que el señor Veas pudiera salir, dirigiéndose a mover el auto para que el señor Veas saliera con su auto. Indica que hay un video en que sale con auto hasta la mitad, se baja tirando palabrazos. Señala que corre su auto, para que el caballero no siguiera discutiendo y terminar el problema, pero que una vez desplazado el auto, él sigue insultando, agregando que intenta calmarlo, lo que se puede apreciar en el video, que él está muy agresivo y no entiende por qué estaba así, que no respetó a menores de edad presentes. Añada que en medio de la discusión, él lo va sosteniendo porque se va acercando cada vez más al señor



Trincado, y en la trifulca él le tira un golpe de puño al señor Trincado, diciéndole posteriormente “te voy a pegar, tú te vas al hospital y yo me voy a la cárcel”, lo que siempre tiene presente, y que el señor Trincado, como sostenía el royo, solo atinó a soltarlo y tirarlo para atrás, y que en ese momento, él (el testigo, señor Meriño) sostuvo el rollo, para que no le pegara a alguien, lo que manifiesta saber porque estuvo ahí y lo presencié todo. Contrainterrogado el testigo para que diga si su mujer fue testigo presencial de los hechos, y si sabe si su cónyuge declaró sobre estos hechos en el proceso penal llevado ante el Tribunal de Juicio Oral de La Serena, señala que si, que ella fue testigo de los hechos y declaró en el juicio penal. En cuanto a si el contenido de la declaración que su cónyuge prestó es el mismo que el testigo dio en este momento, indica que si, que cuando fue el primer juicio no pudo ir a declarar porque estaba en su trabajo, pero que como testigo, vio lo mismo que él. Contrainterrogado para decir si sabe si don Eduardo Trincado constató lesiones, indica que no lo sabe, porque después se fue al trabajo. Interrogado sobre la relación de causalidad entre el hecho ocurrido con fecha 31 de agosto de 2018 y los perjuicios alegados por el actor, indica que no es efectivo, que no va al hecho, que él no recibió ningún daño, golpe, ni nada, que pudiera dejarlo lesionado. Manifiesta que cree que el demandado, por su forma de actuar, fue una persona muy agresiva, lo que le extraña a él, como persona, pues no respetó menores de edad, mujeres, sólo quería agredir e insultar al señor Trincado. Contrainterrogado para que diga si sabe por qué don Eduardo fue condenado por un delito de lesiones graves en contra de don Manuel Veas Tapia, indica que si lo sabe, porque lo conversó con el abogado.

Por su parte, doña Patricia Makarena Garay Zamora indicó que Eduardo (demandado) respondió el golpe propinado por el vecino, cuyo nombre no recuerda, y que de hecho, no lo conoce. Señala que su marido y ella fueron a buscar un pasto sintético a la casa de Ivonne, que es la cónyuge de don Eduardo Trincado. Afirma que su marido se estacionó un poco corrido hacia la vivienda del vecino, y cuando ya estaban yéndose con el fardo de pasto, empezaron a escuchar que estaban tocando la bocina afuera, a lo que Ivonne le dice “el auto, el auto” y su marido sale a correr el auto, saliendo asimismo el vecino a agredir verbalmente a Eduardo, culpándolo a él. Manifiesta que su marido le responde que él fue quien estacionó mal el vehículo, y que lo va a correr, y se acercó enfurecido y le pegó con el puño en el pecho a Eduardo, quien venía con el fardo e imposibilitado de defenderse en ese momento. Después de eso, añade, como Eduardo se va para atrás y perdió su estabilidad, le devolvió una cachetada al vecino. Ahí comenzó a grabar, y están los videos que pueden demostrar sus dichos, de los que está en conocimiento porque estuvo ahí, grabó el video y su voz se escucha en ellos. Contrainterrogada acerca de si sabe si don Eduardo Trincado constató lesiones en alguna unidad de salud, indica que lo desconoce. Contrainterrogada para que diga si sobre estos hechos prestó declaración ante el Tribunal de Juicio Oral de la Serena, en causa RIT 77-2020, indica que no recuerda la fecha pero si asistió a dar testimonio a un juicio en La Serena, ignorando si es la causa que se menciona. Contrainterrogada sobre el resultado de



dicho juicio, indica que sabe que Eduardo (Trincado) resultó condenado. En cuando a la relación entre los hechos acaecidos y el daño alegado por el demandante, indica que no hay relación entre ellos, porque fue una simple cachetada. Dice que cree que el demandante alegaba que era una fisura, que le rompieron la nariz o algo así, y que en el video se ve claramente que no hay sangre ni hematomas.

DÉCIMO: Que se tendrá por acreditada la existencia del delito de lesiones y la responsabilidad del demandado don Eduardo Lenin Trincado Iglesias, con el mérito de la copia de sentencia acompañada a la demanda, toda vez que los hechos que sirven de fundamento a la demanda fueron conocidos por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, que en ejercicio de su jurisdicción y dentro de su competencia, en los autos RIT N° 77-2020, RUC 1800854672-6, dictó sentencia con fecha 10 de abril de 2021, en la cual condenó al demandado como autor de un delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal, cometido en la persona del demandante, don Manuel Antonio Veas Tapia, el día 31 de agosto de 2018, en Coquimbo, a sufrir la pena de un año de presidio menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas del juicio. Agrega la sentencia citada que, concurriendo los requisitos de la ley 18.216, se substituyó la pena privativa de libertad impuesta por la remisión condicional de la pena, por el término de un año, en virtud de los mismos hechos que sirven de fundamento a la demanda.

UNDÉCIMO: Que consecuencia de lo señalado, es que debe tenerse por establecido, según reza en la sentencia ya individualizada, que el día 31 de agosto de 2018, alrededor de las 12:30 horas, en la vía pública, en las afueras del inmueble de calle Río Lauca N° 3147, Solar de Peñuelas, Coquimbo, Eduardo Lenin Trincado Iglesias procedió a agredir a Manuel Antonio Veas Tapia, propinándole un golpe de puño en el rostro, ocasionándole una fractura de lámina papirácea derecha, lesiones que requirieron de un tiempo de sanación de entre treinta a treinta y cinco días, con igual lapso de incapacidad, hechos que configuran un delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal, en grado de consumado, conforme a la prueba pormenorizada en el considerando tercero y siguientes de la sentencia referida. Asimismo, la sentencia penal condenatoria desestimó la pretensión de la defensa de que se exculpara al acusado, por haber actuado en legítima defensa, atendido a que se dio por establecido que la agresión del acusado contra la víctima tuvo lugar con ocasión de un entrevero producido entre ambos, causado por haberse estacionado un vehículo de propiedad de una visita del acusado, obstruyendo la salida de vehículos del estacionamiento del domicilio de la víctima, entrevero en el que Manuel Veas fue el único que resultó lesionado, y cuya agresión por parte del acusado se encuentra reconocida por éste, refrendada por la cónyuge de la víctima, Ivonne Oyanedel, y confirmado, además, por ambos testimonios de descargo, toda vez que Ivonne Ríos y Patricia Garay, encontrándose acreditada y no discutida la agresión del acusado a la víctima, sin que la defensa acreditara los requisitos de la



eximente de responsabilidad que estaba invocando, en especial la agresión ilegítima previa de la víctima., puesto que las grabaciones audiovisuales reproducidas en la audiencia se refieren a la continuación del altercado, después de haberse producido la agresión a la víctima, como reconocieron las dos testigos de la defensa, sin avalar con antecedente alguno que permitiera tener por asentado que el imputado estaba siendo agredido de modo ilegítimo y de forma previa por la víctima, de forma tal que se encontrara obligado a repeler dicho ataque dando un golpe de puño con energía tal que llegó a provocar la lesión ya descrita, adicionando que no existe denuncia sobre esta supuesta agresión de la víctima ni constatación de posibles lesiones, y que el propio acusado, contestando al fiscal, afirmó que le propinó el golpe a la víctima cuando lo vio venir hacia él, de lo que se concluye que no había recibido ningún golpe del demandante, y que, de haber existido, conforme a lo sostenido por los testigos de la defensa, no habría pasado de ser un empujón a la altura de su pecho, considerado una vía del todo inocua para justificar la reacción agresiva del acusado.

De la misma manera, los elementos de comprobación y descargo, especialmente, la pericia de la médico legista Ríos Bedoya, traída a la audiencia de juicio oral a través de su testimonio, permitió tener por acreditada la extensión la naturaleza de la lesión causada a la víctima, esto es, fractura de la lámina papirácea derecha, no dando lugar a dudas de su tiempo de sanación e incapacidad superior a treinta días, ni de su actualidad, lo que fue cuestionado por la defensa y, atento al medio empleado para causarla (un golpe de puño aplicado con alta energía en rostro, según explicó esta profesional), también quedó demostrado el ánimo decididamente lesivo del demandante condenado en sede penal.

DUODÉCIMO: Que el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, establece que siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste, tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o los hechos que le sirvan de necesario fundamento. En tal sentido, se rechazarán las alegaciones de la demandada tendientes a desvirtuar la procedencia de la indemnización de perjuicios, por haber actuado en supuesta defensa propia de una agresión previa del demandante y los alegatos relativos a la extensión del daño argumentando que se trataría de lesiones leves y no graves, por las consideraciones vertidas en la sentencia penal que se han citado precedentemente.

Adicionalmente cabe señalar, que ni de la videograbación agregada por la demanda, ni de los testimonios de los testigos que depusieron por dicha parte, se desprende que el demandado haya sufrido una agresión física por parte del actor en términos de exponerlo a sufrir un daño a su integridad que hubiere justificado una defensa proporcionada de parte del demandado.

DECIMOTERCERO: Que acreditada que ha sido la existencia del ilícito, consistente en el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal, la culpa del demandado, que en la especie emana de una



infracción a las norma penal citada, y la relación de causalidad entre el ilícito y un daño causado al demandante, resta solamente pronunciarse sobre la existencia, naturaleza y monto de dicho daño.

El artículo 2329 del Código de Procedimiento Civil, contiene la principal pauta para la determinación de la extensión del resarcimiento del daño inferido con motivo del delito o cuasidelito civil, puesto que señala que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta”, de lo que se extrae el principio rector en materia indemnizatoria en sede extracontractual, cual es el de reparación integral del daño.

DECIMOCUARTO: Que el demandante alega que ha sufrido un detrimento económico, que por concepto de daño emergente avalúa en, a lo menos, la suma de \$ 2.000.000, en ocasión de la disminución patrimonial experimentada a consecuencia de haberse encontrado en la obligación de incurrir en gastos económicos, consistente en tratamiento médico, medicación y radiografías, a causa del daño producido por el golpe asestado por el demandante.

Al efecto, el actor rindió la prueba documental ya singularizada precedentemente, en particular: **1)** Receta médica, Dr. Roger Bitrán Parada, para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 15 de marzo del año 2019; **2)** Bono de atención, código N° 65756210, exámenes, para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 24 de julio del año 2019. (\$57.735); **3)** Estado de cuenta, de fecha 24 de julio del 2019, detalle para el paciente Manuel Veas Tapia, en la suma de (\$57.735); **4)** Solicitud de exámenes, radiografía para el paciente Manuel Veas Tapia, Dr. Marko Domic Veneros; **5)** Bono de atención ambulatoria N° 39658044, radiografía de cavidades perinasales para el paciente Manuel Veas Tapia, de fecha 27 de noviembre de 2018 (\$685 valor copago beneficiario); **6)** Estado de cuenta, de fecha 27 de noviembre de 2018, detalle para el paciente Manuel Veas Tapia, Clínica Antofagasta. (\$22.824); **7)** Detalle de cuenta Urgencia N° 24184, 31 de agosto del año 2018, para el paciente Manuel Veas Tapia, Clínica Red Salud. (\$50.619);

DECIMOQUINTO: Que, para considerar la extensión del daño emergente sufrido, ha de considerarse los documentos 4 al 7, acompañados en autos y no objetados, en atención a que responden a exámenes que dicen relación con el daño sufrido, y realizados próximos en el tiempo al ilícito perpetrado por el demandado. En cuanto al supuesto gasto incurrido por medicamentos, la receta médica acompañada en autos, singularizada con el número 1, no da cuenta de un desembolso efectuado por el actor. En cuanto a los exámenes médicos a que se refieren el bono de atención de fecha 24 de julio del año 2019 y estado de cuentas numerados 2 y 3, de su mera lectura puede desprenderse que se trata de exámenes generales de perfil bioquímico del demandante, realizados luego de transcurrido un prolongado lapso desde la ocurrencia de los hechos que sirven de fundamento a la demanda, los que tuvieron lugar el 31 de agosto del año 2018 después del delito cometido en su persona, de manera que no resulta posible



efectuar una asociación directa entre éstos y la lesión sufrida por el demandante, esto es, una fractura de lámina papirácea derecha.

En consecuencia, se dará lugar a la indemnización por daño emergente, sólo en cuanto a indemnizar el pago la radiografía de cavidades peri nasales realizadas en Clínica Antofagasta, cuyo Bono acompañado por el demandante da cuenta del copago de \$685 realizado por don Manuel Veas, y al pago de la cuenta de Urgencia en Clínica Red Salud, por la suma de \$50.619, lo que da un total de \$ 51.304 por concepto de daño moral, rechazándose en lo que exceda.

DECIMOSEXTO: Que en cuanto al lucro cesante solicitado por la suma de \$2.000.000, este será rechazado, en atención a los oficios que obran en autos, de Codelco y Previred, junto con la liquidación de sueldo aparejada, que dan cuenta que el demandante no dejó de trabajar durante dicho periodo, y aún cuando hubiere debido hacerlo, al tratarse de un trabajador dependiente, dicho cese debió encontrarse cubierto con las prestaciones de seguridad social propias de toda relación laboral, no encontrándose acreditado por el demandante en consecuencia el lucro cesante pedido, en circunstancias que le correspondía hacerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.

DECIMOSEPTIMO: Que a fin de acreditar el daño moral sufrido, el demandante acompañó a estos autos el documento denominado informe de evaluación psicológica de don Manuel Antonio Veas Tapia, suscrito por la profesional psicóloga Constanza Segovia Ibarra, de fecha 16 de julio del año 2021, el cual no ha sido objetado, y que ha sido reconocido en el presente juicio por la profesional que lo suscribe, doña Constanza Segovia Ibarra, que indica que el demandante presenta alteraciones en diversas esferas de su vida, tanto en lo personal, lo laboral, y lo interpersonal, dando cuenta de que presenta una lesión psíquica que es similar del daño emocional o también llamado daño moral, daño que es atribuido por la profesional al delito sufrido por don Manuel Veas, y que se manifiesta en diversas sintomatologías que guardan relación con la vivencia de la cual fue víctima: sentimientos negativos de humillación, vergüenza, culpa, rabia, preocupación constante por el trauma, sentimientos de indefensión, modificación de las relaciones interpersonales, ansiedad y preocupación excesiva, dificultad en controlar la preocupación, deterioro social, laboral u otras esferas de importancia, síntomas que dan cuenta de una afectación psicoemocional, en la esfera de la ansiedad, existiendo un trastorno adaptativo frente a situación vulneradora vivida. En relación a los procedimientos y la metodología empleada, el informe consigna se realizó entrevista pericial de tipo estructural basada en los indicadores del Psiquiatra Otto Kernberg, que tiene como finalidad evaluar la estructura de personalidad, sus rasgos y características, entrevista libre realizada a la pareja del evaluado, revisión documental de los antecedentes atinentes a la causa, examen mental y análisis según manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, DSM-V.

DECIMOCTAVO: Que en efecto, queda acreditado en autos con las presunciones emanadas de la documental, y con la testimonial ya reseñada



precedentemente en el considerando décimo, la afectación psicológica sufrida por él demandante, que ha provocado consecuencias en las relaciones con su entorno, dando cuenta de un trastorno adaptativo ansioso que configura una lesión psíquica en él, a causa del delito del que fue víctima, sin que por otra parte, se observe que los padecimientos que ha experimentado el actor, dejen secuelas permanentes.

DÉCIMONOVENO: Que habida cuenta de la calidad de víctima del demandante, la naturaleza de la lesión sufrida por el ofendido, el tiempo de su mal, y la situación de angustia generada en su persona, se determinará la indemnización que corresponde por concepto de daño moral al actor, en la suma de \$ 2.000.000.- (dos millones de pesos).

VIGÉSIMO: Que no existen otros antecedentes que alteren lo razonado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1702, 1712, 2314, 2316 y 2332 del Código Civil y 144, 160, 170, 178, 180, 342, 346, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I.- Que SE RECHAZA la objeción documental deducida por la demandada en su presentación de fecha 16 de diciembre del año 2021.

II.- Que SE ACOGE la demanda deducida con fecha 22 de julio del año 2021 solo en cuanto se condena al Eduardo Lenin Trincado Iglesias, ya individualizado, a indemnizar los perjuicios generados por la comisión del delito de lesiones graves en la persona del demandante, a pagar a don Manuel Antonio Veas Tapia las sumas de dinero que se expresarán:

A) La suma de \$ 2.000.000.- (dos millones de pesos) por concepto de daño moral.

B) La suma de \$ 51.304.- (cincuenta y un mil trescientos cuatro pesos) por concepto de daño emergente.

III.- Que cada parte pagará sus costas por no haber resultado ninguna de ellas totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N^o C-835-2021

Dictada por don Ismael Fuentes Navarrete, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Coquimbo, treinta y uno de Mayo de dos mil veintidós**

